JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO 1 DE VALENCIA
PA 411/2022 F

S E N T E N C I A n° 44/23

En Valencia a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés

Vistos por mí D^a MILAGROS LEON VELLOSILO, Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 DE VALENCIA, los presentes autos de Procedimiento abreviado seguidos ante este Juzgado con el número 411/2022 a instancia de [REDACTED], representada por la Procuradora [REDACTED] y asistido del Letrado D. [REDACTED] contra la Resolución de [REDACTED] de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós de la Presidencia de la Diputación de Valencia, dictada en el EXP 2021/94-deriv por la que se reclama a la mercantil recurrente la cantidad de nueve mil trescientos setenta y cuatro con ocho céntimos (9.374,08 E) de euro en concepto de derivación de deudas correspondientes a los años 2013-2017 de IBI. Ha sido parte demandada, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA representado y asistido de su Letrado, en atención a lo ss.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la citada mercantil se formuló demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se declarase contrario a derecho el acto recurrido, con imposición de costas a la contraria.

SEGUNDO. - Admitida la demanda por Decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, previa reclamación del expediente administrativo se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con la comparecencia de ambas partes el día treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, conforme consta en el acta correspondiente. La parte actora formula cuestión previa de inadmisibilidad por no constar el poder de representación de las personas jurídicas, examinada la documentación consta en el escrito de interposición, por lo que se desestima. En dicho acto, la parte demandante se ratificó en sus pretensiones, formulando la demandada oposición en los términos que se recogen en el acta; practicándose la prueba, siendo la propuesta por la actora documental, y testifical que obra unida a las actuaciones se dio por reproducida en el acto de la vista, procediéndose a la práctica de la testifical, dando traslado a las partes para conclusiones, que una vez realizadas las mismas quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

TERCERO. - En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales. Excepto el plazo para dictar sentencia, por la multitud de asuntos en tramite escrito que penden en este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El objeto del presente recurso es la Resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós de la Presidencia de la Diputación de Valencia, dictada en el EXP 2021/94-deriv por la que se reclama a la mercantil recurrente la cantidad de nueve mil trescientos setenta y cuatro con ocho céntimos de euro (9.374,08 E) en concepto de derivación de deudas correspondientes a los años 2013-2017 de IBI

La actora fundamenta su pretensión en que en fecha diez de abril de dos mil diecisiete adquiere el inmueble con referencia catastral n ° [REDACTED], sito en el termino municipal de [REDACTED], mediante escritura pública. En la escritura pública se manifestó por la Administración concursal que el inmueble estaba al corriente en el pago del IBI. La Diputación provincial en el procedimiento EXP 2021/94- puso de manifiesto la existencia de deudas del referido inmueble, iniciando por ello expediente de derivación de responsabilidad por deudas, en este expediente se declaró que las deudas estaban prescritas y la caducidad del procedimiento. Posteriormente se inicio otro expediente con fecha 3 de febrero de 2022 en el que de nuevo se aprobaba la derivación de deuda, se efectuaron las alegaciones correspondientes y en fecha 20 de junio de 2022 se dictó Decreto n ° 8504 en la que se resuelve la terminación y archivo del expediente, notificándose en fecha 4 de julio de 2022. Sin embargo, con fecha 14 de junio de 2022 se recibió notificación del Decreto n ° 8054 de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós en el que se mantiene la derivación de responsabilidad por deudas. La mercantil actora procedió al pago de la cantidad reclamada, así como sus intereses.

La administración demandada se opone alegando que no hay dos resoluciones sino solo una y que la primera resolución no corresponde con el presente supuesto obedeciendo a un simple error carente de entidad, y que no esta motivada.

SEGUNDO. La resolución del litigio para por lo dispuesto en el derecho positivo que se menciona en este fundamento, el art 106 de la ley 39/2015 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

TSJCV:2019:7552 Como ha indicado la sentencia del TSJ del País Vasco de 28-3-2012, nº 219/2012, recurso 589/2011 : "El art. 116.1 de la Ley 30/92 dice: "1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo." Y, en su opinión, la declaración de lesividad es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa; y, por lo tanto, susceptible de ser recurrido potestativamente en reposición, para posibilitar que la propia Administración reconsidere su posición. Desde luego, la parte apelante no indica en qué apartado del art. 109 de la Ley 30/92 incluye la "declaración de lesividad de actos anulables" que contempla el art. 103 de la Ley 30/92 . La declaración de lesividad, como viene reiteradamente afirmando la jurisprudencia, constituye "un mero presupuesto procesal para la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la Administración contra sus propios actos favorables o declarativos de derechos". La STS 18.7.00 (rec. 53/97) que se invoca explica que " no tiene sentido admitir la interposición de un recurso contra la Administración sin mas objeto que evitar que la misma Administración interponga un recurso, en el cual la parte podrá hacer plena defensa de sus derechos, incluida la argumentación en que funda ahora su pretensión". Para la parte recurrente, el argumento únicamente será válido para explicar por qué no cabe interponer recurso contencioso-administrativo autónomo contra la declaración de lesividad, pero no para explicar por qué no cabe recurso de reposición. Sin embargo, aunque el apelante hace referencia a la posibilidad "universal" de recurrir en vía administrativa, se trata de un opinión, no coincidente con el art. 107 de la Ley 30/92 , que expresamente establece que los actos de trámite no son susceptibles de ser recurridos en vía administrativa, salvo que se esté en alguno de los supuestos contemplados. Como señala el art. 107.1 párrafo 2, "la oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento". En este caso, la declaración de lesividad no es sino el presupuesto para el ejercicio de acciones por la Administración contra sus propios actos, decisión que se adopta previa audiencia de los interesados. Pero se trata de la configuración de un presupuesto procesal que delimita el ámbito de la acción de lesividad ante la Jurisdicción, y que se adopta previa audiencia de los interesados, pero que no es sino la configuración de un presupuesto procesal indispensable para la legitimación activa de la Administración cuando pretende actuar como parte demandante contra sus propios actos. El art. 116.1 de la Ley 30/92 establece la alternativa (recurso potestativo de

reposición o impugnación directa), puesto que se trata de la reacción contra actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Es pacífica la posición jurisprudencial contraria a entender que la declaración de lesividad de actos anulables pueda ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, y ello hace que decaiga, igualmente, la posibilidad de ser recurrida potestativamente en vía administrativa, porque, en último término, también si se posibilita este recurso se está ante la falta de sentido de posibilitar un recurso contra la Administración, sin más objetivo que solicitar que no se interponga por la propia Administración un recurso en el que también la propia parte podrá intervenir, y cuestionar la propia declaración de lesividad, que no es sino presupuesto procesal para la correcta configuración de la legitimación activa de la Administración, y controlable jurisdiccionalmente, en su caso".

La administración alega que la primera resolución no esta motivada, y que estamos ante un acto que no llego a existir, careciendo de eficacia. Examinado el primer Decreto que se dicto en el EXP2021/94 se observa que el mismo esta motivado, y que se ha seguido el procedimiento legal, con las alegaciones de las partes, no siendo un acto carente de contenido como asi establece la JurisprudenciaLa administración demandada se opone a ello por los motivos alegados en el acto de la vista que aquí se dan íntegramente por reproducidos En este sentido de conformidad con art 35.1 de la ley 39/2015de 1 de Octubre, serán motivados con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derechos h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Examinada la Resolución Sancionadora que se encuentra junto con la demanda, la misma se considera ajustada a derecho, dado que existe un relato de los hechos, y su correspondiente fundamentación aplicable a los mismos, la Notificación de las mismas y los recursos contra ella. Valga recordar la ST CO “La expresión de las razones que han llevado a la Administración a dictar una determinada resolución, es decir, la motivación, ha de hacerse mediante una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. No es necesario que adopte la forma de las resoluciones judiciales, es decir, antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, sino que será suficiente una referencia sucinta a los hechos que se deriven del expediente en que se dicta la resolución y a los fundamentos jurídicos para dictarla. Tal y como indica la jurisprudencia «(...) los actos administrativos han de considerarse suficientemente motivados cuando permiten conocer las razones determinantes de la decisión que contienen, sin que resulte necesario un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los argumentos aducidos por el recurrente. En esta misma línea, tenemos declarado que la motivación de la sanción es la que permite al destinatario (en este caso al sancionado) conocer los motivos de su imposición, en definitiva de la privación o restricción del derecho que la resolución sancionadora comporta, permitiendo, a su vez, el eventual control jurisdiccional de la decisión administrativa.» (STS 3ª - 20/04/2010- 131/2009).

No obstante, tal y como apuntábamos «(...) y ello en plena conformidad con la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional, que admiten reiteradamente la motivación de los actos administrativos por referencia a informes o datos obrantes en el expediente, que permitan conocer al recurrente las razones por las que la Administración le deniega sus peticiones y pueda articular adecuadamente sus medios de defensa, que es lo trascendente, sentencias del Tribunal Constitucional nº 122 de 25 de abril de 1994 -EDJ1994/3632- y del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2001 -EDJ2001/45239-.» (STS 3ª – 5/12/2006).

La expresión de las razones que han llevado a la Administración a dictar una determinada resolución, es decir, la motivación, ha de hacerse mediante una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. No es necesario que adopte la forma de las resoluciones judiciales, es decir, antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, sino que será suficiente una referencia sucinta a los hechos que se deriven del expediente en que se dicta la resolución y a los fundamentos jurídicos para dictarla.

Por tanto, a la vista de las alegaciones la primera Resolución que se dictó en el expediente referido se encuentra motivada. pues la misma refiere cuales son los hechos y las circunstancias concurrentes, en base a los que se declara extinguida la deuda, con cita de la normativa aplicable, motivación que además ha sido conocida y comprendida por la parte demandante, como se pone de manifiesto en las alegaciones realizadas en la demanda instauradora de las presentes actuaciones. Resolución que le ha sido notificada, y además favorece al interesado.

En este caso se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, la administración debió declarar nulo dicho acto, e iniciar un nuevo procedimiento, no puede la administración declarar prescrita la deuda generando confianza en el ciudadano, y posteriormente inicia otro en sentido contrario. Es necesario respetar no solo el principio de seguridad jurídica, sino también el de confianza legítima, cosa que no se ha hecho en esta litis, al no declarar la administración nulo el primer Decreto y posteriormente dictar otro en sentido opuesto.

El recurso se estima.

TERCERO.- Finalmente, cabe señalar que, de conformidad con lo que aparece previsto en el párrafo 1º del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según el cual: *“en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”*, No ha lugar a imposición de costas al existir serias dudas de derecho en la resolución de esta litis.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por [REDACTED] representada por la Procuradora [REDACTED] y asistido del Letrado [REDACTED] contra la Resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós de la Presidencia de la Diputación de Valencia, dictada en el EXP 2021/94-deriv por la que se reclama a la mercantil recurrente la cantidad de nueve mil trescientos setenta y cuatro con ocho céntimos (9.374,08 E) de euro en concepto de derivación de deudas correspondientes a los años 2013-2017 de IBI.. DECLARANDO QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO NO ES CONFORME A DERECHO Y DEBE SER REVOCADO.

Se declara como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a la devolución de las cantidades ingresadas, así como el interés legal de las mismas desde la fecha de su ingreso hasta su devolución.

No ha lugar a imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recuso alguno de conformidad con art 81 de LRJA, en atención a la cuantía

Llévese certificación literal de esta sentencia a los autos originales y el original al libro de su clase.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA. - Dada la anterior resolución para notificar en el día de hoy, en el que queda incorporada al libro de sentencias y autos definitivos de este juzgado con e n ° de orden expresado en el encabezamiento poniendo en los autos certificación literal de la misma. Valencia a 23/2/2023